

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 15 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por Manuel Salas Orea, José María López, Manuel Antonio Vargas, Anselmo Martínez, Francisco Jimenez y José María Hernandez contra la sentencia pronunciada por el Gefe político de Córdoba que los condenó á la pena de muerte como reos de varios actos de robo con asalto y heridas cometidos en cuadrilla, aplicándoles la ley de 3 de Mayo del presente año contra salteadores y plagiarios, con violacion, segun manifiestan de las garantías consignadas en los artículos 14, 23 y 29 de la Constitucion federal, por no ser ninguno de los delitos de que se les ha hecho cargo, el de asalto en camino ni otro alguno de los que la Constitucion permite castigar con la pena capital y considerando: que para los salteadores y plagiarios están suspensas las garantías que otorgan los artículos 23 y 29 de la Constitucion, segun lo previene la ley de 3 de Mayo del presente año, la cual declara como salteadores, á los que en gavilla atacuen en poblado á los habitantes con el objeto de robarlos, herirlos ó matarlos; y que segun las constancias de autos, los delitos porque han sido juzgados los quejosos son de asalto y robo en gavilla y otras circunstancias agravantes; con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta.

Primero: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 18 de Setiembre del presente año, que declara haber lugar al amparo federal en el presente caso.

Segundo: La Justicia de la Union no ampara ni protege á Manuel Salas Orea, José María López, Anselmo Martínez, Manuel Antonio Vargas, Francisco Jimenez y José María Hernandez, contra la sentencia

TOMO V.—PARTE II.

de muerte que pronunció en su causa el Gefe político de Córdoba.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 13 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor interino.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por Candelario Rivera, contra la sentencia de la primera Sala del Tribunal Superior del Estado, por la que fué consignado al Juez segundo del ramo criminal, para que de nuevo le instruyera causa por una herida que habia inferido á Genaro Cardona.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Gefe de hacienda, encargado de llevar la voz fiscal, dice: que el Juez Conciliador de Topia juzgó á D. Candelario Rivera por el delito de heridas y pronunció en calidad de fallo un auto de sobreseimiento. Revisado el proceso por el Tribunal Superior de Justicia, conforme á ley de 5 de Enero de 1857 y artículo 152 de la ley de 9 de Octubre de 1861, dispuso que continuase el proceso ante el Juez 2º del ramo criminal, mediante los trámites correspondientes. Con

estas disposiciones no aparece violada ninguna de las garantías que otorgan los artículos 14 y 24 de la Carta fundamental de la República, en los cuales se apoya el quejoso para obtener el amparo que solicita. Analizando los citados artículos de la Constitución general, se deducen con claridad las consecuencias que siguen. Primera: Rivera ha sido juzgado con arreglo á leyes expedidas con anterioridad al hecho ó delito por el cual se juzga, y en consecuencia no ha sido violada la garantía que otorga la 1ª parte del artículo 14 de la Constitución. Segunda: Las leyes por las cuales se ha juzgado han sido bien aplicadas como por delito grave, puesto que está demostrado con el tiempo que duró la curación del herido y con haber quedado ciego; resultando de estas reflexiones, que no se ha violado la garantía que otorga la 2ª parte del citado artículo 14. Tercera: el auto de sobreseimiento del Juez Conciliador debió pasar en revisión al Superior, como en efecto pasó con arreglo á las leyes vigentes. Por esto no puede decirse que el reo haya sido juzgado dos veces, y en consecuencia no se ha violado la garantía que otorga el artículo 24. El fiscal que suscribe, apoyado en las razones expuestas y con fundamento de ley de 20 de Enero de 1869 pide al Juzgado se sirva declarar, Primero: Que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Candelario Rivera contra los procedimientos de las autoridades judiciales del Estado. Segundo: Que Rivera ha incurrido en la pena que señala el artículo 16 de la citada ley de 20 de Enero de 1869 debiendo ser multado en la cantidad que el Juzgado estime conveniente y obligado á reponer con el papel del sello 3º el 5º de que ha hecho uso su apoderado en sus últimos escritos.

Durango, Noviembre 15 de 1873.—*Juan Nájera.*

Es copia que certifico. Durango, Noviembre 25 de 1873.—*Juan Nájera.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Durango, Noviembre 25 de 1873. Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Candelario Rivera contra una sentencia de la 1ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado, por la que fué consignado al Juez 2º del ramo criminal para que de nuevo se le instruyera un proceso que ya se había concluido por el Juez Conciliador de Topia, con motivo de una herida que infirió á Genaro Cardona. Vista la suspensión del acto reclamado; el informe de la autoridad ejecutora; el pedimento fiscal y cuanto mas ver convino.

Considerando: que de las constancias de autos aparece, que el día 29 de Enero de 1870 el C. Candelario Rivera dió un balazo en una pierna al C. Genaro Cardona.

Que practicada la averiguación correspondiente, consta plenamente que esta desgracia fué ocasionada por un juego de manos, si bien imprudente y peligroso, pero muy común entre las gentes de la Costa. Que esta circunstancia y la de que la herida fué calificada de leve por el perito que la reconoció, indujeron al Juez Conciliador de Topia á creer que estaba en el caso del artículo 44 de la ley reglamentaria de justicia del Estado. Que en virtud de ese artículo, sobreseyó en la sumaria, imponiendo á Rivera la pena de un mes de reclusión con el sobrecargo de pagar todos los gastos de curación y alimentos del herido, que ascienden aproximativamente á la cantidad de ciento veintiseis pesos, fojas 14 del cuaderno 2º y certificado de fojas 6 del mismo cuaderno. Que posteriormente en 2 de Mayo de 1873, es decir, después de transcurridos tres años y medio, se presentó Cardona en esta ciudad ante el Tribunal de Justicia, denunciando el hecho cometido por Rivera, y quejándose de que no había sido castigado como correspondía por el Juez Conciliador de Topia. Que con este motivo el Tribunal de Justicia del Estado proveyó el auto que aparece á las fojas 2

del 2º cuaderno, consignando el delito al conocimiento del C. Juez 2º del ramo criminal de esta ciudad, y dando orden al Juez Conciliador de Topia para que procediera á la aprehension y remision del acusado; así como de las diligencias que sobre el particular hubiere practicado. Que una vez llegado el C. Candelario Rivera á esta ciudad en virtud de la orden de que se ha hecho mencion, dirigió desde su prision al nuevo Juez que conocia de su causa, el escrito que corre á las fojas 8, alegando que ya habia sido juzgado en el lugar de su residencia por el delito de que nuevamente se le acusa.

En esta virtud el C. Juez 2º del ramo criminal, dudando sobre si tenia ó no facultad para continuar conociendo de una causa terminada ya, dictó el auto que corre á las fojas 21.

Remitidos los autos á la 1ª Sala del Tribunal de Justicia, se dictó á pesar de lo alegado por el quejoso el auto que aparece á las fojas 34, y por el que revocando el auto de sobreseimiento del Juez Conciliador de Topia, sugetaba al acusado á nuevos procedimientos.

Que por lo expuesto se ve, que hay una verdadera oposicion entre el auto dictado por el C. Ministro de la 1ª Sala del Tribunal y el fallo pronunciado por el C. Juez Conciliador de Topia.

Que para poder apreciarla y decidir si hay ó no violacion de garantías, es preciso tener en cuenta los artículos de la ley reglamentaria de justicia del Estado en que respectivamente están fundadas ambas resoluciones.

Considerando: que por los términos en que está concebido el fallo del C. Juez Conciliador de Topia, se viene en conocimiento de que aquella autoridad se fundó en lo prevenido en el artículo 44 de la ley de Justicia de que se ha hecho referencia.

Que por declaracion expresa se vé, que el auto del C. Ministro en que revoca el fallo del inferior, tiene por fundamento el artículo 152 de la ya citada ley.

Que el artículo 44 dice á la letra: "En los negocios criminales sobre delitos leves, como hurto simple, cuyo valor no exceda de veinticinco pesos entre personas de escasa fortuna, y de cincuenta respecto de las acomodadas; heridas leves, portacion de armas prohibidas, infraccion de armas de policia y otros hechos semejantes, conocerán en la cabecera del Distrito, primero, los dos Jueces del ramo criminal por turno seminario; en la de los Partidos en que debe residir el Juez letrado, éste y por su falta el de 1ª instancia, y en las cabeceras de los demas Partidos y Municipalidades donde hubiere Ayuntamiento, los Jueces Conciliadores turnándose por semanas donde hubiere dos. El procedimiento será verbal consignándose en una acta y limitándose á averiguar breve y sumariamente el hecho y sus circunstancias, examinando los testigos, interrogando al reo, y haciéndose los cargos que le resulten, oyendo lo que por sí ó por su defensor exponga en su descargo, y pronunciando el fallo á mas tardar dentro de quince dias de aprehendido el reo, ó de comenzado el procedimiento. La sentencia causará ejecutoria; pero se mandará copia de la acta al Juez de 2ª instancia, para el solo objeto de que vea si se ha procedido con arreglo á derecho, y para que en caso contrario se exija la responsabilidad al infractor.

Las penas que impongan los jueces de que habla este artículo por los delitos á que se refiere, no podrán exceder de cien pesos de multa ó de cuatro meses de obras públicas ó de seis de reclusion ó de trabajos interiores de cárcel ó hospital.

Que el artículo 152 está concebido en los siguientes términos: "Los Jueces de 1ª instancia sobreseerán en las causas, si terminado el sumario vieren que no hay méritos, para continuarlas ó que el procesado no resulta acreedor sino á pena correccional, en cuyo caso la impondrán desde luego. El auto en que se mandó sobreseer, se elevará siempre á la revision del Supe-

rior, el que de plano calificará sin ulterior recurso.

Que prescindiendo de la cuestion de si el Juez Conciliador de Topia cometió un error al calificar el delito de Rivera de leve, siempre es cierto que una vez hecha esa calificación, sus procedimientos debieron sujetarse al artículo 44 de la ley citada, en cuyo caso el Superior solo ha debido ocuparse de la responsabilidad en que haya podido incurrir el inferior y no de lo intrínseco del delito.

Que el artículo 152 en que se fundó el C. Juez de 2ª instancia, es verdaderamente una ampliacion del 44 y cuya prescripcion tiene lugar en causas de delitos que al principio se presentan con el carácter de graves, pero que terminado el sumario, se vé, ó que no hay méritos para continuarlas ó que el procesado no resulta acreedor sino á una pena correccional, en cuyo caso dice el artículo se impondrá desde luego.

Que aun en el anterior caso del artículo 152, el Juez de 2ª instancia revisando el auto del inferior, solo debe ocuparse de su responsabilidad supuesto que en la parte final de dicho artículo expresamente se determina que calificará sin ulterior recurso.

Que por lo expuesto se viene claramente en conocimiento de que el Juez de 2ª instancia, en el caso de que se viene haciendo mencion no puede modificar la pena impuesta por el de 1ª supuesto que debiendo hacerse esa calificación sin ulterior recurso, cuando esta modificación importara una pena mayor, el reo quedaría destituido de los recursos que en su calidad de acusado le oforgan las leyes tanto naturales como civiles.

Que en el caso de que Candelario Rivera haya sufrido realmente una pena menor de la que merece su delito, invocando como se invocan en los fallos expresados, los artículos 44 y 152 ya citados, es el C. Juez Conciliador de Topia á quien debe exigirse la responsabilidad y no sugetar á Candelario Rivera á sufrir nuevas penas á mas de las enunciadas.

Por tales consideraciones y en vista de todo lo expuesto se declara. Primero: Que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Candelario Rivera contra el auto de 6 de Agosto del presente año que pronunció la 1ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado en virtud del que revocando la sentencia del inferior y consignando al quejoso al Juez 2º del ramo criminal, lo sugetó á nuevos procedimientos por un delito de que estaba ya juzgado. Segundo: remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision y sáquense las copias correspondientes para la redaccion del "Semanario Judicial" y por este auto definitivamente juzgando así lo proveyó y firmó el C. Juez de Distrito Lic. Gerónimo Sida, por ante mí. Doy fé.—*Gerónimo Sida.*—*Juan B. Arellano*, secretario.

Es copia que certifico. Durango, Noviembre 25 de 1873.—*Juan B. Arellano*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 3 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por Candelario Rivera, contra la sentencia de la 1ª Sala del Tribunal Superior del Estado, por la que fue consignado al Juez 2º del Ramo criminal, para que de nuevo le instruyera causa por una herida que habia inferido á Genaro Cardona; cuya providencia viola en concepto del quejoso, las garantías consignadas en los artículos 14 y 24 de la Constitución federal, por haber ya conocido de ese hecho el Juez conciliador de Topia, condenándolo por sentencia definitiva á un mes de prision. Considerando:

Que conforme al artículo 44 de la ley de Justicia del Estado, la sentencia pronunciada en un juicio criminal por los Jueces conciliadores, causa ejecutoria; no quedando mas recurso que el de responsabilidad

contra el Juez infractor. Que el artículo 152 de la misma ley, en que se fundó el Tribunal para revocar la sentencia del Juez Conciliador, no puede tener aplicación alguna en ese caso, pues se refiere únicamente á los autos de sobreseimiento dictados por los Jueces de 1ª instancia y no á las sentencias definitivas pronunciadas por los Jueces Conciliadores.

Que habiendo ya recaído una sentencia ejecutoria en la causa seguida á Candelario Rivera, la resolución mandando instruir de nuevo el proceso, con apoyo de una disposición legal inaplicable al caso, constituye una infracción de los artículos 14 y 44 de la Carta fundamental de la República; y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la misma, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 25 de Noviembre del año pasado, que declara, que:

La justicia de la Unión ampara y protege á Candelario Rivera, contra el auto de 6 de Agosto del año pasado que pronunció la 1ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado, en virtud del que revocando la sentencia del inferior y consignando al quejoso al Juez 2º del ramo criminal, lo sujetó á nuevos procedimientos por un delito de que estaba ya juzgado.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias Jua. J de la Garza.—José M. Lozano.—Ignacio Ramírez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—Luis Velasquez.—José García Ramírez.—Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 3 de 1874. *Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa instruida al Sr. Lic. D. José Isaac Sancha, por responsabilidad en sus procedimientos como Juez 1º de Distrito de esta Capital.

Pedimento del C. Fiscal del Tribunal de Circuito.

El Fiscal dice:

Que á virtud del auto dictado por esta Sala, ejerciendo las funciones de Tribunal de Circuito, en 3 de Enero último, el C. Ministro semanero procedió á instruir la sumaria contra el C. Juez 1º de Distrito José Isaac Sancha, terminando con la confesion con cargos, en la cual el acusado se remitió á lo expuesto por su defensor en un escrito que presentó al mismo C. Ministro, pidiendo por conclusion el sobreseimiento de la causa. En tal estado, el Tribunal ha mandado entregarla al que suscribe para formalizar la acusacion, que es el trámite correspondiente; y como aquella debe tener por base así las constancias del proceso como las contestaciones á los cargos, sería muy conveniente la referencia de aquellas al ocuparse de estas, con objeto de que se perciba la verdad y luz ca al fin la justicia. No debe pasar adelante el Fiscal sin protestar solemnemente, que en el estudio del proceso y en la presente respuesta, no ha sido movido por algun principio innoble, sino solo por el cumplimiento de su obligacion, segun la cual presentará los hechos de la misma manera que los perciba, y los calificará segun su conciencia le dicte, igualmente distante del desco de la impunidad y del innmerecido castigo. La comunicacion del Ministerio de Hacienda y sus contestaciones, así como las demas constancias regis-